

EJ Atlas revela patrones de abusos relacionados con las minas de minera canadiense Pan American Silver en América Latina

2 de marzo de 2020

Contacto:

Yannick Deniau, EJAtlas, yannick.deniau@gmail.com (Español)

Kirsten Francescone (o Jamie Kneen?), MiningWatch Canada, kirsten@miningwatch.ca (English)

TORONTO, CANADA. Hoy, el equipo del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) [lanzó un mapa interactivo que detalla daños significativos relacionados con ocho sitios mineros en América Latina que pertenece a la compañía minera canadiense Pan American Silver.](#)

“Es importante poner a disposición de las comunidades afectadas o amenazadas por los proyectos de la empresa en diferentes países, y de la opinión pública en general, información sobre lo que ha sucedido en otros lugares donde opera la misma compañía. En contraste con el discurso de Pan American Silver como una compañía minera responsable, el mapa documenta conflictos socio ambientales relacionados con varias de sus minas desde México hasta Argentina, con una falta de respeto de la compañía por la autodeterminación de las comunidades opuestas a sus proyectos”, comentó Yannick Deniau de EJAtlas.

En 2009, Pan American Silver adquirió el proyecto Navidad en la provincia de Chubut, Argentina, a pesar de que la minería a cielo abierto y el uso de cianuro han sido prohibidos en la provincia desde el año 2003, gracias a los esfuerzos permanentes de las asambleas ambientales a nivel local. Las asambleas, siempre atentos a la actuación de sus legisladores, denuncian que la empresa ha cabildeado con las autoridades locales, provinciales y nacionales para modificar o anular esta legislación para poder explotar este depósito grande de plata.

Diez años después, en 2019, Pan American Silver compró la mina Escobal en Guatemala, a pesar de la suspensión de las operaciones mineras por la oposición masiva y una decisión judicial que sentenció que el estado discrimina al pueblo indígena Xinka y que no lo había consultado. Ahora, Pan American Silver está participando en un proceso de consulta dirigido por el Estado de Guatemala que ha sido denunciado por sus múltiples irregularidades, incluyendo la discriminación y exclusión del pueblo Xinka.

El lanzamiento del mapa coincide con la feria minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto, de lo cual Pan American Silver es un patrocinador. Anualmente, PDAC organiza la conferencia en que más de 25,000 personas asociadas con la industria minera se reunirán para promocionar sus intereses y hablar sobre las tendencias de la industria.

“Mientras que Pan American Silver promueve su imagen patrocinando a PDAC, las experiencias negativas de las comunidades afectadas por la minería en todo el mundo están completamente ausentes del programa de la conferencia”, comenta Kirsten Francescone de MiningWatch Canadá. “Este

mapa de EJAtlas documenta violencia en múltiples minas de Pan American, desde México hasta Perú, documentando la forma en que las comunidades afectadas han sufrido hostigamiento, amenazas y criminalización.”

En Zacatecas, México, para expandir la mina La Colorada entre 2014-2017, hubo desplazamiento forzada de la comunidad local bajo amenaza de guardias de seguridad privada, y ahora la comunidad denuncia que vive en condiciones sofocantes bajo control social de la empresa. En Chihuahua, México, desde que la zona en donde opera la mina Dolores fue militarizado y las protestas locales sobre cuestiones económicas y ambientales suprimidas, la empresa ha logrado operar sin mayor interrupción a pesar del recrudecimiento de violencia en la zona.

Hasta la fecha, el EJAtlas ha documentado 616 casos de conflictos mineros en todo el mundo, con más de una cuarta parte de esos casos vinculados a empresas canadienses. Pan American Silver se une a Barrick Gold y B2Gold, todos ellos patrocinadores de PDAC 2020, entre las compañías canadienses con más conflictos registrados por EJ Atlas.

El mapa fue realizado en colaboración con las organizaciones MiningWatch Canada, Earthworks y el programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, entre otros.

Acceder al mapa interactivo: <https://ejatlas.org/featured/envconflictsPAS>

Más información (en Anexo)

Anexo: Descripción del caso

Conflicto y daños en los proyectos de Pan American Silver en América Latina

Este mapa revela los conflictos y daños provocados por ocho proyectos mineros que pertenecen a la empresa canadiense Pan American Silver, desde México hasta Argentina. Lejos del discurso sobre la minería sostenible y responsable, sus prácticas evidencian el nulo respeto hacia los pueblos que defienden los territorios y se oponen a la minería. La empresa lucra en donde las comunidades han enfrentado militarización, criminalización, violencia, hostigamiento y amenazas. Se ha documentado la contaminación ambiental en torno a varias de sus operaciones, las cuales también afectan o amenazan recursos hídricos esenciales. Ha habido conflictos laborales con accidentes ocupacionales.

Nulo respeto por los pueblos que se oponen a la minería

Pan American Silver (PAS) ha comprado grandes proyectos de plata y oro a pesar de la amplia y reconocida oposición a la actividad minera de los pueblos afectados.

En 2009, la empresa adquirió [el proyecto Navidad en la provincia de Chubut, Argentina](#), donde la minería de metales a cielo abierto y el uso de cianuro están prohibidos por una ley provincial aprobada en 2003, luego de un plebiscito y masivas movilizaciones populares. Las asambleas ambientales de la

zona denuncia que la empresa presiona para lograr su habilitación, tanto a nivel local y provincial como nacional. En 2014, más que 17,000 ciudadanos de Chubut firmaron una iniciativa legislativa que propusieron para reforzar la prohibición de la minería a nivel provincial. La población está preocupada por el potencial impacto de la minería a gran escala en la cuenca del Sacanana y los acuíferos subterráneos de la meseta.

En 2019, con su adquisición de la empresa Tahoe Resources, PAS asumió el control de [la mina Escobal en el sur de Guatemala](#). Frente a la amplia resistencia pacífica, el Estado y la empresa Tahoe recurrieron a la criminalización, violencia y militarización para reprimir a la población y abrir la mina en 2014. Escobal operó hasta mediados del año 2017, cuando los pobladores bloquearon el acceso a la mina y la corte la suspendió por discriminación y falta de consulta al pueblo Xinka. La corte también mandó al Ministerio de Energía y Minas que lleve a cabo la consulta. El pueblo Xinka ha denunciado que la consulta, aún en proceso, ha sido denunciada por discriminatorio e ilegal, por ser basado en un área de influencia determinado antes de que el proceso había iniciado oficialmente.

[La mina de oro Shahuindo en Cajamarca, Perú](#), es otro proyecto que PAS adquirió con la compra de Tahoe Resources. Hay oposición permanente al proyecto desde el valle de Condebamba, una zona netamente agrícola, en donde la población se preocupa por el impacto de la mina sobre sus fuentes de agua. Desde 2016, las agencias regulatorias peruanas han emitido varios informes sobre contaminación por metales pesados de la mina, encontrando que las fuentes de agua no son aptas para el consumo humano. Pobladores han sufrido represión y criminalización por sus protestas sobre la pérdida de agua y contaminación por la mina. Las tensiones sociales persisten desde que PAS tomó control del proyecto.

Lucra en zonas militarizadas y en donde comunidades están sometidas

En México, los pueblos afectados por los proyectos de PAS viven en contextos de violencia, militarización y sometimiento.

Entre 2013 a 2017, PAS despojó las tierras de la comunidad afectada por [la mina La Colorada, en el estado de Zacatecas](#), para expandir sus operaciones. La comunidad fue desplazada forzosamente por efectivos de seguridad privada y sus viviendas destruidas con maquinaria pesada. Unas 230 personas fueron reubicadas en una “Unidad Habitacional”, en donde la empresa tiene altos niveles de control sobre la vida cotidiana de las familias y la población vive en condiciones sofocantes. La población se preocupa por posibles impactos en su salud dado la proximidad de sus viviendas a la mina. El Comité de la Población de La Colorada sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos a la tierra natal.

PAS compró [la mina Dolores](#) en la Sierra Tarahumara, Chihuahua en 2012, en un contexto de violencia extrema por la militarización de la zona y una disputa territorial entre carteles. La militarización de la zona no ha dado protección a la población, sino que ha servido para imponer la explotación minera. Por ejemplo, militares facilitaron acceso al sitio minero para el dueño previo a PAS, la empresa minera canadiense Minefinders, durante un bloqueo de 17 meses que mantuvo la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa, quienes reclamaron mejor renta para sus tierras y mayor cuidado del medioambiente. Luego, líderes comunitarios denunciaron que hubo presencia e intimidación por parte de la policía federal durante la asamblea definitiva sobre el acuerdo con la empresa, lo cual aseguró que el grupo favorecido por la empresa ganaría. A mediados de 2018, cuando PAS ya estaba operando la mina, se cerró la mina por unos días frente los altos niveles de violencia en la vía hacia la mina,

además de amenazas de atacar a sus helicópteros. Esta situación limita severamente la libertad del pueblo para ejercer sus derechos frente a cualquier violación o abuso, y genera altos riesgos para periodistas y organizaciones sociales que podría documentar o solidarizarse con la comunidad.

Impactos ambientales

Las posibles y actuales impactos en el medioambiente de las operaciones mineras de PAS son una fuente de preocupación entre las comunidades afectadas en diversos países, especialmente por el peligro que significa estos proyectos mineros para fuentes de agua y el bienestar de las poblaciones. Además, en un par de casos, se ha documentado cómo las autoridades ambientales son capturados por los intereses de las empresas mineras, fomentando la impunidad por daños ambientales.

Como ya se ha mencionado, la preocupación por la contaminación ambiental, especialmente en las fuentes de agua, ha sido motivo de las resistencias al proyecto Navidad y las minas Escobal y Shahuindo en Argentina, Guatemala y Perú respectivamente.

En el caso de la mina Dolores en México, aún antes de su compra por PAS en 2012, hubo 100 familias indígenas Pima desplazadas por un corte en el río Tutuaca y la contaminación generada por la mina. En 2010, también hubo un derrame de cianuro de sodio en un patio de lixiviación del proyecto. Sin embargo, las quejas de las comunidades afectadas en esta zona hacia las autoridades ambientales se quedaron sin respuesta o con una respuesta que afirmó que no hubo daño ambiental.

En el caso de [la mina Manantial Espejo, la cual opera en la provincia de Santa Cruz, Argentina](#), la aprobación de los estudios de impacto ambiental está a cargo de la Secretaría de Minería, en claro de conflicto de intereses, y fomentando la impunidad en casos de daños ambientales. Por ejemplo, en 2012, hubo derrames debido a la ruptura del ducto que va desde la planta de procesamiento al dique de colas y los funcionarios provinciales minimizaron el posible impacto.

En Perú, la empresa ha participado en esfuerzos para debilitar la fiscalización ambiental a través de una demanda en contra del cobro de un pago anual necesario para el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Entretanto, la mina Quiruvilca - la primera mina que PAS adquirió y operó, desde 1995 a 2012 en el norte del país - recibió 22 multas por las agencias de fiscalización cuando PAS la operaba. Ahora, la prensa peruana lo ha denominado una “bomba de tiempo”. PAS vendió la mina a la empresa Southern Peaks Mining en 2012, cuando ya estaba agotado sus vetas y el jefe ejecutivo de PAS de ese entonces dijo a la prensa que confiaba en la responsabilidad de Southern Peaks, que la empresa iba a cuidar trabajadores y comunidades. Sin embargo, la mina fue abandonada en 2017 y, desde este entonces, ha habido cinco declaraciones de emergencia en las comunidades por los niveles de contaminación con metales pesados en el río Moche relacionado con el drenaje ácido de la mina (lo cual empezó mucho antes que la llegada de Southern Peaks), y la inestabilidad de los depósitos de relaves.

Conflictividad laboral

La relación de PAS con sus trabajadores tampoco está exenta de problemas. En Perú, desde 2000 a 2019, el Ministerio de Energía y Minas registra [42 accidentes fatales en las filiales de la empresa](#) entre (18 en Quiruvilca, 19 en Huarón y 5 en Morococha). [En Manantial Espejo](#), murieron dos jóvenes operarios en 2015 y [un operario en junio de 2019](#). En Bolivia, durante la última disputa laboral en [la](#)

[mina San Vicente en 2017](#), el sindicato se declaró en estado de emergencia debido a la falta de equipos de seguridad y las deterioradas condiciones de trabajo en los socavones. Al 2018, [PAS empleaba más de 4000 trabajadores y empleadas tercerizados](#) que no pertenecían a ningún sindicato o asociación laboral, o alrededor de 57% de todos sus trabajadores.